

Política y elecciones en el norte de África

Gema Martín Muñoz
Profesora de Sociología
del Mundo Árabe e Islámico
de la Universidad Autónoma
de Madrid.
Directora del área Magreb-
Medio Oriente en
el Centro Español de
Relaciones Internacionales
(CERI), Madrid.

Los procesos electorales son períodos privilegiados para la observación política porque se ponen al descubierto elementos sustanciales del tejido social y político del régimen, proporcionando un marco extraordinario para analizar su naturaleza y organización. Por ello, el hecho de que unas elecciones no puedan ser definidas como competitivas y libres no hace que disminuya la importancia de su estudio y el interés de su análisis, dado que los comicios siempre cumplen funciones que conviene dilucidar y buscan objetivos políticos sobre los cuales es también necesario apreciar hasta qué punto han sido o no alcanzados. La convocatoria durante 1995 de diversos comicios en Túnez, Argelia y Egipto nos permiten utilizar dichos períodos como observatorio político no sólo de cada uno de esos países sino también, a través de los elementos comparativos y las interrelaciones existentes entre unos casos y otros, de la dinámica política que caracteriza a buena parte de la región norteafricana. Los procesos electorales objeto de estudio aquí son los comicios municipales celebrados el 21 de mayo en Túnez, las elecciones presidenciales argelinas del 16 de noviembre y las legislativas egipcias del 29 de noviembre y 6 de diciembre. Estas elecciones mostraron las transformaciones de la escena política, los cambios en la estrategia gubernamental con respecto a los islamistas y los ejes del discurso oficial en el que se basa dicha estrategia, poniendo de manifiesto el proceso de *desliberalización* política experimentada en los últimos años por estos países norteafricanos en contra de la dinámica aperturista que los caracterizó durante la segunda parte de los ochenta. Los procesos electorales de 1984 y 1987 en Egipto, de 1989 en Túnez y de 1990 y 1991 en Argelia pusieron de manifiesto que los ejes principales de la apertura política eran la transición del monipartidismo al pluripartidismo y la integración de los sectores islamistas no violentos en el proceso. El golpe de Estado de enero de 1992 en Argelia puso fin a la transición liberal en este país, a la vez que en Egipto y en Túnez los respectivos procesos de apertura política se frenaban y las estrategias respecto al islamismo ponían fin a la táctica de la integración, reorientándose a favor de la persecución y la represión. Sin embargo, la principal razón del fracaso de estos procesos de liberalización no provino del éxito inevitable de un islamismo *amenazante* sino de la falta de arraigo democrático de dichos procesos. La reestructuración del campo político norteafricano desde entonces ha introducido nuevas dinámicas de relación entre los Estados y una restauración autoritaria en el ejercicio del poder, enmarcada en un fenómeno de recomposición profunda de los grupos políticos en presencia. El carácter convergente de las políticas antiislamistas

adoptadas por Egipto, Túnez y Argelia les ha llevado a estrechar considerablemente sus vínculos, reflejados en una intensa actividad diplomática y en la adopción de acuerdos de cooperación en el campo de la seguridad. Asimismo, los tres países adoptarán aproximadamente la misma presentación oficial del conflicto con los islamistas, tendiendo a reducirlo a un problema de terrorismo. Los discursos oficiales tienden a convertir al régimen en el representante del islam «auténtico» y «moderado», a la vez que proclaman que el islamismo, sea cual sea la tendencia, no puede engendrar más que violencia y extremismo, buscan la adhesión popular fomentando la tesis del «complot extranjero» y tienden a justificar por la amenaza islamista el control ejercido por el poder sobre la sociedad civil y sus reticencias a liberalizar el régimen¹.

El unanimismo tunecino

Las elecciones municipales del 21 de mayo de 1995 pusieron de manifiesto el debilitamiento de la oposición política legal tunecina, la resistencia gubernamental a ofrecer un marco de acción más favorable a dicha oposición, y, en consecuencia, las fracturas del «consenso» nacional promovido por el poder frente al islamismo en las elecciones presidenciales y legislativas del 20 de marzo de 1994. La capacidad del régimen para atraerse a las élites y oposición política del país se vió acrecentada por el efecto de reacción por parte de éstas contra la tendencia islamista, dado que, por un lado, se trata de los sectores sociales que, beneficiarios del proceso de modernización y secularización e integrados en términos socioeconómicos, ven peligrar su privilegiado status, y, por otro, la tendencia islamista supone una poderosa concurrencia para una oposición no islamista escasamente implantada en el país. Asimismo, la situación de la vecina Argelia desde 1992, utilizada como revulsivo por el régimen, acrecentó dicha reacción.

En consecuencia, la oposición tunecina ha experimentado durante los últimos años un movimiento de aproximación al poder que le llevó a aceptar las escasas posibilidades que éste le ofrecía en los comicios de 1994 en pro del argumento

de valorar la participación cualitativa sobre la cuantitativa, y a la espera de que el régimen ampliase gradualmente la apertura en los siguientes comicios municipales. Ello le valió al presidente de la República, Ben 'Ali, ser reelegido el 20 de marzo de 1994 por el 99,91% de los votos con el apoyo de todos los partidos legales de la oposición; y a dichos partidos lograr 19 escaños en el Parlamento en pro de una enmienda de la ley electoral que preveía una cuota para aquellos grupos que no lograsen ganar ningún diputado, como fue el caso de todos los partidos rivales del partido gubernamental, Reagrupamiento Constitucional Democrático (RCD)². Dichos partidos son, en sustancia, tres formaciones políticas históricas: el partido *Ettajdid*, heredero renovado del Partido Comunista Tunecino existente como tal desde 1934 e ilegal entre 1963 y 1981, el Movimiento de Unidad Popular (MUP), de orientación ideológica panarabista y socializante, y el Movimiento de Demócratas Socialistas (MDS), de ideario socialdemócrata. Legalizado en 1983, el MDS, con audiencia en los medios intelectuales y las profesiones liberales, era la oposición no islamista mejor situada cuando Ben 'Ali inició la liberalización a finales de los ochenta. No obstante, la estrategia gubernamental de subyugación de las élites perjudicó de forma notable a este partido y en 1992 padeció una grave crisis interna de la que salió vencedora la línea favorable a una actitud conciliadora con el poder. Junto a estos grupos existen tres nuevas formaciones, muy minoritarias, legalizadas en 1988: la Unión Democrática Unionista (UDU), el Reagrupamiento Socialista Progresista (RSP), que constituye la formación más a la izquierda del panorama político legal tunecino, y el Partido Social Liberal (PSL)³. Por su parte, el partido gubernamental, dotado de gran capacidad de movilización en un país completamente cuadrículado por él en todos sus estadios sociales, va a difundir un discurso sabiamente calibrado a fin de lograr el apoyo nacional. Dicho discurso se organiza en torno a cuatro pilares: estabilidad, prosperidad, consenso y progreso. Las llamadas desde el poder a la «moderación» y a la «prudencia» para que los partidos políticos le apoyen *consensuadamente* contra la «amenaza islamista» se prolonga en la premisa de que ello es necesario para seguir logrando la *estabilidad* del país y que por tanto hay que apoyar también la prioridad absoluta dada por el Gobierno a la *seguridad*, porque, a su vez, constituye la única vía capaz de garantizar la *prosperidad* económica

“Las elecciones de 1995 han puesto de manifiesto el proceso de desliberalización política de los países del norte de África”

y el *progreso*. Esta argumentación que nutre todo el discurso oficial tunecino tiene como objetivo justificar los abusos contra los Derechos Humanos cometidos en pro de la seguridad del país y el autocratismo creciente del régimen. El «unanimismo» se erige como condición sine qua non para lograr que «Túnez no sea Argelia».

A fin de conseguir que este discurso sea aceptado por la oposición y la sociedad tunecina, el régimen recurre a dos importantes bazas: los buenos resultados económicos (media de crecimiento anual del 5%; inflación moderada en torno al 4,7%; débil endeudamiento en torno al 53% del Producto Interior Bruto; nivel de vida en aumento) y la explotación a su favor de la crisis argelina. Lo que podríamos denominar el *síndrome argelino* es objeto de utilización permanente por el régimen tunecino, presentando la situación de violencia que vive ese país como ejemplo de lo que le podría ocurrir a Túnez si el hombre y el partido que lo rigen no hubiesen sabido dirigirlo como lo han hecho. Asimismo el modelo argelino es expuesto como prueba de lo bien fundado de la posición gubernamental tunecina a favor de la persecución de la tendencia islamista y en contra de un proceso de democratización rápida que haga de la alternancia un objetivo inmediato. Unido a esto, la adopción de medidas a favor de la mujer, ciertas realizaciones en el campo de la educación y en el desarrollo de algunas zonas muy desprotegidas del país, han ido destinadas a buscar el apoyo al régimen de ciertos sectores de la población. Las elecciones municipales del 21 de mayo de 1995 pusieron de manifiesto las consecuencias de la recomposición política experimentada en Túnez desde 1992 y fueron el detonante que abrió la primera brecha en el «consenso» logrado por el régimen desde esa fecha. Por un lado, en estos comicios se constató el proceso creciente de debilitamiento de la oposición legal, fruto de sus crisis internas y del descrédito por su complacencia con respecto al régimen. Por otro lado, quedó patente la falta de voluntad del régimen a abrir el juego político, en contra de lo esperado por la oposición como premio a su «buena conducta». El declive de la oposición quedó reflejado en su incapacidad para presentar listas en todas o la mayor parte de las circunscripciones del país, particularmente del MDS que ha perdido su capacidad anterior para transmitir la percepción de que era susceptible de medirse con el partido gubernamental. Y, mientras la oposición mostraba que no disponía sino

de medios irrisorios que, además, en buena medida debía al Estado-RCD, éste exhibió, como había hecho en las legislativas, una inmensa capacidad para estar presente sobre el terreno controlando una enorme red de organizaciones sociales, regionales y nacionales. A la vez, las municipales confirmaron la estrategia gubernamental de renovación y rejuvenecimiento del RCD, iniciada en 1988⁴, así como su búsqueda de apoyo en los sectores femeninos, aumentando el número de mujeres en las candidaturas. En consecuencia, los resultados electorales dieron al RCD el Gobierno de todos los municipios del país, marcando un paso atrás respecto a los comicios de 1990 en los que la oposición había logrado la municipalidad de Chebba. No obstante, aunque no le faltaba razón a las declaraciones del ministro del Interior, tras los comicios, afirmando que para vencer en las elecciones eran necesarios «hombres, mujeres, un programa y una base», elementos todos «que le faltan a la oposición» (*Bulletin d'Information Africaine*, 283/95), todo ello no es ajeno a la actitud del régimen en su implacable reapropiación de los espacios plurales del país y en su resistencia a abrir el juego político, como mostró en los comicios municipales, resitiéndose a modificar el sistema electoral. Éste favorece sin ambages a la formación mayoritaria, a la cual reserva la mitad de los escaños, y el resto se reparte proporcionalmente entre todas las formaciones, incluida la ganadora, que hayan obtenido un mínimo del 5% de los votos expresados.

Estos comicios, por tanto, probaron que el régimen tunecino ha logrado llevar a cabo con éxito su estrategia de implosión y debilitamiento de la oposición legal tunecina, a la vez que controla férreamente el país en pro de un discurso que ha sabido filtrar a importantes segmentos de la población en el que asocia estabilidad y prosperidad con seguridad y unanimismo político. Para la oposición, principalmente el MDS, las municipales supusieron una toma de conciencia de su retroceso progresivo y de la falta de resultados de la estrategia seguida asumiendo la concepción del régimen respecto a la situación política del país. En consecuencia, estas elecciones actuaron de agente reactivo para el MDS dando un nuevo vuelco a sus relaciones con el poder. El presidente del MDS declaró que las elecciones «no hacen honor a Túnez» y otro destacado miembro del partido dijo públicamente «apostamos por una aproximación leal del con-

senso con gentes que, de la lealtad, no tienen la misma concepción que nosotros» (*Bulletin d'Information Africaine*, 283/95). Desde entonces, dicho consenso quedó quebrado abriéndose una crisis entre el MDS y el régimen como resultado del cambio de actitud de quien hasta entonces había sido el gran valedor en el partido de dar un apoyo cada vez menos crítico al presidente Ben'Ali. Así el presidente del MDS, Mohammed Moadá, desafiaba al presidente de la República enviándole, el 21 de septiembre de 1995, una carta requisitoria de 10 páginas en la que afirmaba que «Túnez vive una vuelta al partido único hegemónico y dominador» y acusaba al régimen de utilizar el miedo al islamismo para justificar el autocratismo del régimen. El 9 de octubre Moadá era detenido, acusado de mantener «relaciones secretas y comprometedoras» con un país extranjero (Libia) y meses después era condenado a 11 años de cárcel. Asimismo, la oposición tunecina en el exterior comenzó a finales de 1995 a organizar una estrategia semejante a la planteada por la oposición argelina en la denominada «Plataforma de Roma».

La publicación de un comunicado conjunto firmado por el líder del partido islamista tunecino *Al-Nahda* y diversas personalidades tunecinas de oposición, pidiendo la instauración de un régimen democrático en Túnez, parece buscar dos objetivos: atraer la atención sobre el autoritarismo del régimen, y mostrar, al ser firmado el comunicado por la oposición islamista y no islamista, que el problema

“El problema no es el de «todos contra el islamismo», como pretende el régimen tunecino, sino de democratización del sistema”

no es de «todos contra el islamismo», como pretende el régimen, sino de democratización del sistema. No obstante, seguro del control del país gracias a un férreo sistema policial, al éxito económico unido a algunas realizaciones sociales y a la manipulación del miedo al islamismo para amordazar a ciertos sectores de la población y de la comunidad internacional, el régimen tunecino se considera estable y no percibe ninguna necesidad de democratizar o abrir el sistema. Pero cabe preguntarse cuánto tiempo el poder podrá escudarse en el crecimiento económico y el peligro islamista ante una sociedad que, fruto de su desarrollo socioeconómico, cuenta con una clase media y profesional cada vez más consolidada y

que, necesariamente, aspirará cada vez más a participar en el espacio político y a ser realmente representada en él.

El «pluralismo» argelino

Tras cuatro años de vacío institucional, desde que en enero de 1992 se cerró el Parlamento y se *hibernó* la Constitución, las autoridades argelinas optaron por celebrar elecciones presidenciales el 16 de noviembre de 1995. Percibir cuál fue la función y objetivos de dicha convocatoria constituye el elemento de análisis fundamental. ¿Las elecciones se convocaban para solucionar un problema de legitimidad a fin de que la actual jefatura del Estado pudiese resistir los desafíos internos y ofrecer alguna muestra de voluntad política a la comunidad internacional, o para resolver problemas internos de un poder minado por dispares intereses de clan, o para arreglar los problemas de Argelia y buscar una salida pacífica a su crisis multidimensional, como parece ser que pensaron la mayor parte de los votantes? La decisión gubernamental de celebrar las presidenciales tuvo lugar inmediatamente después de que la oposición argelina más representativa firmase conjuntamente una declaración de principios, conocida como la Plataforma de Roma, firmada en esta ciudad en enero de 1995. En dicho documento, el Frente Islámico de Salvación (FIS), el Frente de Fuerzas Socialistas (FFS), el Frente de Liberación Nacional (FLN)⁵ y otras formaciones menores expresaban de manera consensuada la necesidad de diálogo con el poder en el marco de un período transitorio que diera paso a un marco político plural y democrático. La Plataforma tuvo un importante alcance político sobre todo a dos niveles. Por un lado, promovió el desdoblamiento de la escena política argelina dado que hasta entonces la división de las fuerzas políticas permitía al poder ostentar el monopolio de la iniciativa. Por otro, tras el encuentro en Roma, el FIS ya no estaba aislado y con él firmaban otros partidos políticos no islamistas. Lo cual mostraba también a la comunidad internacional que la imagen de un FIS extremista difundida por el poder en Argelia, pilar fundamental de su estrategia para detener el proceso democrático, tomar a todo el país como rehén y pasar un discurso al exterior basado en la elección entre él o el fanatismo, no se acomodaba bien a la realidad. Calificada esta iniciativa de la oposición como «injerencia extranjera» y «no

acontecimiento» para el país, las autoridades argelinas ofrecieron su propia propuesta política basada en la celebración de elecciones presidenciales, sin por ello dejar de apostar por la solución militarista.

Los partidos firmantes de la plataforma de Roma no participaron en las elecciones por considerar que era necesario manifestar unitariamente que la fórmula de diálogo político ofrecido por el poder no era ni suficiente ni clara con respecto a sus objetivos. En consecuencia, las elecciones se organizaron con la participación de los actores políticos que, de una u otra manera, han estado próximos al poder desde 1992: los líderes del Reagrupamiento por la Cultura y la Democracia (RCD), del partido HAMAS y del Partido de la Renovación Argelina (PRA)⁶. La tendencia auto-proclamada «erradicadora» (radicales que no admiten ninguna fórmula de diálogo con el islamismo y piden su aniquilación) dió lugar a una recomposición, la Alianza Nacional Republicana (ANR). Definiéndose como partido «modernista y antiintegrista» y tratando de resucitar el «budiafismo», la ANR parecía buscar atraerse a sectores ideológicamente afines de la sociedad argelina que no se hubiesen unido al *Ettehad* (ex comunistas) o al RCD, a causa de la reducida base sociopolítica del primero y la marcada implicación regional (berberismo cabil) del segundo. No obstante, la ANR no logró quebrantar al FFS, al que increpaba su vinculación con la oposición islamista en la Plataforma e invitaba a unirse a su propuesta de «contención del integrista y reforma profunda del Estado», ni tampoco atraerse a Mulud Hamruche, antiguo primer ministro durante el período liberalizador de Bendjedid. De hecho, Hamruche se perfiló en algún momento como posible candidato «reconciliador» a la presidencia y las candidaturas de Buteflika y Taleb Ibrahimí⁷ fueron vistas un tiempo como posibles personalidades «puente» entre el viejo y nuevo orden capaces de lanzar la transición. Finalmente, ninguna novedad marcó la escena electoral y, tras las deliberaciones, siempre crípticas, de los grupos que encarnan el poder argelino, se optó por la continuidad en el liderazgo, presentándose el que ocupaba ya la jefatura del Estado, Liamin Zeroual. Quedaba por dilucidar si el plebiscito que probablemente recibiría Zeroual sería el punto de arranque de una transición que ampliase el juego político y la integración de toda la oposición en el proceso o si sería utilizado para reforzar el continuismo del régimen y debilitar a la oposición.

Es de señalar que las tres principales corrientes políticas triunfadoras en las legislativas *interrumpidas* de diciembre de 1991, esto es, el Gobierno, el islamismo y el berberismo, se reprodujeron en las presidenciales aunque los actores fueran otros. Entonces era el FLN y ahora Zeroual, entonces fue el FIS el principal representante del islamismo y ahora Nannah aspiraba a sustituirle, entonces fue el FFS de Aït Ahmed el representante principal de la corriente berberista y ahora era Sa`d Sa`idi quien pretendía reemplazarle. No obstante, si comparamos los resultados obtenidos por aquellas formaciones que participaron conjuntamente en los comicios de diciembre de 1991, observamos grandes diferencias de representación entre ellas: HAMAS logró el 4,7% de los votos emitidos y el FIS el 47,2%; y el RCD el 2,5% frente el 7,4% del FFS. Los resultados de las elecciones significaron un plebiscito para Liamin Zeroual, quien logró el 61,3% de los votos emitidos con una participación del 74,9%⁸, levantando oleadas de apoyo de los medios de comunicación extranjeros. Más allá de las eventuales presiones sobre la población y de los posibles *retoques* de las cifras, lo cierto es que el poder supo articular el marco electoral de manera que logró transmitir a una población entre la que es enormemente impopular la idea de que él era la única salida a la violencia y al caos. Y todo ello se logró combinando la extraña circunstancia de que los comicios estuvieron precedidos de varias semanas sin violencia con un discurso en el que Zeroual daba a entender que consideraba necesario relanzar la idea de reconciliación nacional y su compromiso al diálogo invocando a todas las fuerzas políticas argelinas. En su discurso a la nación del 28 de noviembre Zeroual proclamaba: «invoco a las argelinas y argelinos a transformar el triunfo de su voluntad libre y soberana en punto de partida de un esfuerzo liberado para construir el futuro, superar los residuos de nuestras divergencias y de nuestras divisiones, a reconciliarnos con nosotros mismos, a hacer progresar nuestra democracia y nuestro desarrollo y a reconquistar nuestro verdadero lugar en el concierto de las naciones». Asimismo, el discurso oficial argelino supo también sacar beneficios para su imagen de la comparación con los regímenes vecinos, resaltando las diferencias entre los índices electorales argelinos y los plebiscitos de más del 90% con los que se hacen elegir los otros gobernantes norteafricanos. El pluralismo también fue un factor

de diferencia, afirmando que salvo el Líbano, Argelia es el único país árabe en que, lejos de la fórmula del candidato único, concurrían cuatro candidaturas. Tras las elecciones, la oposición de la Plataforma de Roma, en un ejercicio de realismo político, aceptó el éxito de los organizadores del escrutinio y reiteró su disposición a un diálogo político serio en vistas a los próximos comicios legislativos. Sin embargo, los meses que han seguido a las elecciones no han hecho sino confirmar la voluntad continuista del régimen. La amnistía esperada no ha tenido lugar⁹ y el nuevo Gobierno de Zeroual constituido a primeros de enero de 1996 apostaba por la continuidad, dejando todos los puestos claves en manos de los mismos hombres, limitándose a incluir dos portafolios de alcance meramente simbólico para Hamas y el PRA. Reforzado en el poder, seguro por la actitud mayoritaria de una comunidad internacional que se ha convencido de que las elecciones en sí han resuelto el problema en Argelia, el régimen, lejos de iniciar el cambio esperado, se ha orientado a favor de una estrategia

a la tuncina de *domesticación* de la oposición, principalmente el FLN y el FFS, aprovechando el desgaste que ha supuesto para ambas formaciones las acusaciones reiteradas de abandonismo del terreno político por su boicot en las elecciones y las crisis internas que esto les ha acarreado. Asimismo, poder y medios de comunicación afines realizaron una lectura, ampliamente difundida, de que la elevada participación electoral de los argelinos significaba el derrumbe de la Plataforma de Roma.

Con respecto al FLN, el episodio electoral sirvió para hacer desembocar un proceso iniciado hace tiempo en contra de Abdelhamid Mehri, secretario general del partido y principal valedor de la línea rupturista con respecto al poder que ha caracterizado al FLN desde el golpe de Estado de 1992. Si bien Mehri logró vencer las fuertes resistencias de los *barones* de los clanes rivales en el seno del partido para lograr que el FLN no apoyara los comicios (aunque no pidiera su boicot), no logró salir triunfante de la reunión del Comité Central, de enero de 1996, en el que Mehri fue cesado y Hamruche perdió ante Bualem Benhamuda, considerado ultraconserva-

dor. Por 89 votos contra 82, éste se erigió como nuevo secretario general, marcando un nuevo cambio de rumbo político para el FLN que, recuperando su tradicional papel de partido gubernamental, se perfila como la posible formación que le hace falta al presidente Zeroual para las próximas legislativas. Por su parte, el FFS es también susceptible de desestabilización por el régimen, incentivando una crisis interna que se acentúa por la larga ausencia de su líder, instalado en Europa desde 1992, y que deberá afrontar un difícil congreso nacional a primeros de marzo de 1996. Y el FIS, sometido a una enérgica represión y a profundas divergencias internas que su liderazgo encarcelado no puede controlar, se encuentra sumido en un proceso de implosión que se acentúa por su incapacidad para mostrar que no es el movimiento político extremista que el régimen quiere difundir. Para debilitar aún más el FIS, el nuevo Gobierno argelino integró a un ex dirigente de este partido, Ahmed Merani, como ministro de Asuntos Religiosos, que además de servir a detractar públicamente al FIS, parece tener la misión de intentar generar una *recreación domesticada* del FIS, capaz de atraerse base social y disidentes del partido. Sin duda el régimen argelino —que además del presidente agrupa toda una complicada red en la que se combinan poderes burocráticos y militares con intereses de clan— ha sabido beneficiarse de la situación generada por las elecciones presidenciales para reforzar su posición y debilitar la de los rivales, poniendo de manifiesto que el objetivo de la convocatoria electoral era la organización y el éxito del escrutinio en sí mismo, sin que sigan iniciativas concretas para solucionar la crisis multidimensional de Argelia. La desestructuración a la que parecen abocados los partidos favorables a un cambio democrático pacífico y con implantación popular no augura sino la continuación de la deriva violenta para este país norteafricano, como muestran las escasas y controladas noticias que de allí llegan. Las elecciones parecen haber sido un eslabón más de la ya larga cadena de expectativas frustradas de cambio y reconciliación nacional a la que los argelinos llevan sometidos desde 1992. El carácter críptico y clánico del poder facilita la dinámica de altibajos en los que la percepción de que todo puede cambiar rápidamente alterna con la sensación de que la crisis está estancada sin solución. ¿Cuánto tiempo el pueblo argelino será capaz de soportar esta situación que se acompaña de una degradación creciente de su situación social y económica?¹⁰

“Los meses que han seguido a las elecciones no han hecho sino confirmar la voluntad continuista del régimen argelino”

Gobierno y Hermanos Musulmanes en Egipto

El presidente egipcio Husni Mubarak, en su discurso parlamentario con ocasión de su reelección como candidato a la presidencia en 1993, proclamaba que su nuevo mandato estaría marcado por «el signo de una lucha sin cuartel contra el activismo islamista» (*Al-Abram*, 18.07.93). Estas palabras venían a confirmar la línea de lucha antiislamista del Gobierno inaugurada en 1992. Ese año fue también el comienzo del cambio en las relaciones entre el poder y los islamistas moderados, marcando el declive de la estrategia de relativa integración de los Hermanos Musulmanes en el juego político, puesta en práctica en los años precedentes. Desde entonces el discurso oficial asumió la tesis contraria a la mantenida hasta ese momento, pasando a considerar que los moderados no sirven para aislar a los extremistas sino para ayudarlos en sus fines subversivos. En consecuencia, las autoridades egipcias irán incrementando sus acciones contra la corriente de los Hermanos Musulmanes, aunque por el lado de éstos no falten manifestaciones de denuncia de los actos de violencia que tienen lugar en el país por parte del sector radical de las *Gama`at*.

Asimismo el régimen se va a reafirmar en la represión como única respuesta al fenómeno de la violencia islamista radical, a la vez que adoptará una tendencia cada vez mayor a controlar los espacios plurales aún existentes en el país, exponiéndose a continuas denuncias por la situación de los Derechos Humanos¹¹. Unido a esto y reproduciendo lo que se ha mostrado como una dinámica generalizada en los países norteafricanos aquí estudiados, la oposición egipcia no islamista, principalmente el partido liberal-conservador del *Wafd* y el izquierdista Reagrupamiento Nacional Progresista Unionista (RNPU), ha realizado espectaculares aproximaciones al Gobierno, debilitando con ello su capacidad para representar una alternativa política creíble frente a un régimen desacreditado y a un proyecto islamista liderado por los Hermanos Musulmanes, que se beneficia de haberse desarrollado independientemente del aparato del Estado y en oposición declarada contra él. Éstos a su vez, en busca de una cobertura legal que paliara su no reconocimiento, ha cooptado progresivamente al Partido del Trabajo (PT), primero, y al partido *Al-Abrar*, después, lo cual sólo ha contribuido a polarizar la

escena política entre Gobierno y Hermanos Musulmanes, neutralizando la influencia de los demás grupos políticos existentes en el país. Asimismo, tratando de reproducir en Egipto la estrategia del «consenso nacional» basado en la exclusión de los islamistas, el régimen egipcio apeló en 1994 a un «diálogo nacional» con las fuerzas políticas de oposición no islamista, algunas personalidades del país y ciertos sectores de la sociedad civil, en su mayor parte próximos al poder. No obstante, el objetivo de la Conferencia Nacional para el diálogo fue su celebración en sí misma a fin de que contribuyese a ampliar la legitimidad y base social del Gobierno, dado que, bajo el lema general de «preparar el siglo a venir», los temas debatidos fueron sociales y económicos, relegándose los políticos.

Las elecciones legislativas de finales de noviembre de 1995 vinieron a constatar todos estos factores fruto de la tendencia a la *desliberalización* que, arropada con un discurso similar al de los vecinos norteafricanos, ha experimentado también el régimen egipcio desde 1992. Por un lado, emergió sin ambages la política de represión e intransigencia gubernamental de cara a los Hermanos Musulmanes, que presentaron unas 150 candidaturas por la vía independiente y a través de sus aliados, el PT y el *Abrar*, siendo objeto del acoso policial pocos días antes de los comicios a través de redadas y detenciones múltiples. Por otro lado, el *Wafd* y el RNPU comprobaron los escasos frutos que recogía su estrategia política, logrando tan solo dos escaños el primero y uno el segundo en unos comicios monopolizados por el partido gubernamental, Partido Nacional Democrático (PND), y plagados de irregularidades que arrojaron un balance de más de cuarenta muertos. 16 millones de electores tenían que elegir un parlamento de 444 escaños para la legislatura 1995-2000. Además de una serie de formaciones políticas ultraminoritarias, el PND (439 candidatos), los Hermanos Musulmanes (150), el *Wafd* (187), el RNPU (40), el PT y los naseristas compitieron en unos comicios donde la ley electoral era desfavorable para la oposición. Los resultados de estas elecciones contestadas por todos ellos otorgaron a toda la oposición el 2% de los votos, el resto quedando monopolizado por la formación gubernamental¹².

No obstante, la capacidad del régimen tunecino para sumir a la tendencia islamista en la clandestinidad o el exilio no es asimilable al caso egipcio, dado que la tendencia islamista en

Egipto es de las más relevantes del mundo árabe y de las mejor implantadas, contando con una acumulación histórica que arranca de los años treinta. Su marginación del ámbito institucional no ha frenado su expansión sino más bien le ha llevado a invertir en la sociedad civil (uniones de estudiantes, sindicatos profesionales, asociaciones de ayuda social, bancos islámicos) y a crear espacios *islámicos* en barrios. Los Hermanos Musulmanes siguen representando la corriente mayoritaria del islamismo en Egipto, ejercen una importante atracción entre la juventud y sectores de la *intelligentsia* y están muy bien implantados entre las clases medias urbanas y en el tejido socioprofesional, con un arraigo histórico y social en este país que es difícil de combatir por el régimen. Por otro lado, el fenómeno de la violencia que existe de forma localizada en Egipto tampoco es comparable al caso argelino porque, a diferencia de éste, el Estado egipcio cuenta con una sólida y larga experiencia histórica que ha forjado su identidad en tanto que nación. Egipto sigue siendo un Estado fuerte y no parece que, de momento, su estrategia de confrontación pueda permitir a los islamistas radicales extender el fenómeno de la violencia más allá de sus feudos del sur. Hay que tener en cuenta que en Argelia es la principal tendencia del islamismo la que está enfrentada con el poder, lo que no es el caso de Egipto donde la violencia emana de la *Gama`at* y no de los Hermanos Musulmanes, que reclaman su legalización desde hace años. Sin embargo, el fondo de la cuestión no se plantea tanto en relación a la capacidad del poder de ganar materialmente su batalla contra el islamismo radical, como respecto a su aptitud para suprimir las causas que lo alimentan y la inestabilidad que de ello se deriva.

Notas

1. Dicho discurso va a encontrar en el ámbito de la política exterior una vía de aplicación privilegiada dirigida a obtener en los foros internacionales condenas del terrorismo, aparentemente vinculado al islamismo. Tales condenas son presentadas a las opiniones públicas nacionales como prueba del respaldo internacional a los respectivos Gobiernos. Las declaraciones en ese sentido, emanadas en la cumbre de Casablanca

de la Organización de la Conferencia Islámica (15.12.94) y en la reunión entre los ministros del Interior del sur de Europa y de Túnez y Argelia (21.01.95) han servido para movilizar el apoyo exterior a la vez que permitían utilizar la política exterior para reforzar la legitimidad política interna. En este mismo marco se inscriben las resoluciones del Consejo de Ministros Árabes del Interior en su décimosegunda sesión anual, inaugurada el 4 de enero de 1995 en Túnez. Dejando todas sus diferencias políticas al margen, los ministros acordaron un pacto por la seguridad colectiva y contra el integrista, adoptando una propuesta egipcia de «código de conducta común» para luchar contra el terrorismo (*Révolution Africaine*, 1611/95).

2. El sistema mayoritario a una vuelta a nivel de circunscripciones, imposible de superar por los minoritarios partidos de oposición, no experimentó ningún cambio y, como había ocurrido en los comicios anteriores, el RCD obtuvo los 144 escaños correspondientes a las 25 circunscripciones del país. La diferencia introducida en 1994 estribaba en la concesión otorgada por la ley de un reparto proporcional a nivel nacional de 19 escaños entre aquellos partidos que no hubiesen ganado diputados y obtenido un 5% de votos a nivel nacional. Con este sistema el régimen lograba dar apariencia de apertura, desviar la concurrencia electoral entre poder y oposición a favor de la rivalidad entre los seis partidos de la oposición, siendo como eran conscientes de que no tenían posibilidades de aspirar a conseguir escaños por el otro sistema, y comprometer a la oposición aceptando un sistema en el que es el poder, y no el voto popular, quien les permite entrar en el Parlamento.

3. En las legislativas de marzo de 1994, el RCD obtuvo el 97,73% de los votos emitidos en tanto que la oposición se repartió el 2% restante (64.202 votos). Los 19 escaños «cuota» se repartieron entre el MDS (10), *Ettajdid* (4), la UDU (3), y el MUP (2). Ver Denoeux, G. «Tunisie: les élections présidentielles et législatives. 20 mars 1994», *Maghreb-Machrek*, 145/94.

4. El RCD es el heredero del Partido Desturiano que gobernó monolíticamente durante la era Bourguiba. Ben `Ali, al acceder al poder en 1987, quiso dar una imagen renovadora al partido cambiando su nombre e integrando nuevos miembros. En las municipales de 1995, 76% de los candidatos eran nuevos y 85% tenían menos de 50 años (*Jeune Afrique*, 1793/95).

5. El FIS, creado en 1989 encarnó la fuerza islamista de oposición más votada en las elecciones municipales de 1990 y legislativas de 1991. El FFS está liderado por Ait Ahmed y es una formación socialdemócrata de implantación básicamente bereber si bien tiene voluntad de ser fuerza política nacional y el FLN es el ex partido único argelino. Estos tres partidos fueron las fuerzas políticas más votadas en las elecciones legislativas de diciembre de 1991.

6. El primero, Sa`id Sa`di, reclamó en enero de 1992 la anulación de las elecciones, y pertenece a la corriente «erradicadora» argelina, siendo activo defensor de la constitución de «grupos civiles de autodefensa» que actúen contra los grupos islamistas armados. El segundo, Mahmud Nahnah, representa una corriente ideológica próxima a la de los Hermanos Musulmanes, aunque su papel en Argelia ha sido la de un fundamentalismo de «oposición constructiva», cuando no de compromiso con el poder, al que se ha aproximado con frecuencia desde que en 1981 fue excarcelado por Chadli Bendjedid, disociándose de la línea contestataria de sus colegas argelinos Madani, Sahnun, Benhadj, razón por la cual Nahnah rechazó formar parte en la creación del FIS. Las tensiones entre Nahnah y el FIS, constantes desde 1989, aumentaron cuando Nahnah negó el apoyo al FIS en las municipales de 1990, fecha en la que aún no había creado el partido HAMAS. El tercero, Nureddin Bakruh, representa a un partido ultraminoritario con un discurso islamizante nacido durante la liberalización política de finales de los ochenta.

7. Ambos son figuras conocidas de la política argelina. Buteflika fue un hombre del presidente Huari Bumedián y ministro de Asuntos Exteriores, además de haber aspirado a la sucesión de Bumedián a su muerte. Ahmed Taleb Ibrahim, heredero de la corriente de los Ulemas de Ben Badis, se considera investido de la doble legitimidad histórica argelina: la nacionalista y la religiosa. Conocido por haber formado parte del ala conservadora bumedianista y por haber sido ministro de Cultura y de Exteriores, desde 1992 se ha significado por sus llamadas a favor del diálogo con el FIS.

8. El número de inscritos fue de 15.969.904 y el de votantes 12.087.281. Liamin Zeroual obtuvo 7.088.618 votos, Mahfud Nahnah 2.971.974, Sa`id Sa`di 1.115.796 y Nureddin Bakruh 443.144 (periódicos argelinos, 17-18.11.96).

9. En pro de la política de *rahma* (clemencia) defendida por el Gobierno se llevó a cabo en diciembre de 1995 el cierre del campo de In M'guel y la liberación de más de 600 personas retenidas en él fue percibida como una medida positiva que, sin embargo, no ha tenido continuación (*Al-Watan*, 18.11.95).

10. Los trabajadores del sector público llevan hasta 20 meses de retraso en el cobro de sus salarios, la industria se encuentra en situación de decrepitud, la inversión privada no se desarrolla, el paro alcanza a uno de cada cuatro argelinos en activo (30% de la población activa). El Producto Nacional Bruto tuvo una tasa de crecimiento cero en 1994 y, según numerosos expertos, en 1995 estaría cerca de cero. A señalar también que la media de los argelinos gasta el 75% de su salario en alimentación y que el índice de éxito escolar en el bachillerato no supera el 20%. Asimismo, un informe del Fondo Monetario Internacional constataba en enero de 1996 que Argelia no había alcanzado los objetivos económicos previstos, lo cual, sin embargo, no impidió que el consejo de administración del FMI aprobase la continuación de la ayuda financiera que, el 22 de mayo de 1995, se plasmó en la concesión de 1,8 mil millones de dólares con un reembolso inmediato de 240 millones. (*Le Monde* 18.10.94 y 12.01.96; *Al-Watan*, 25.05.95 y 10.07.96, *Le Matin* 2-3.06.95).

11. Los informes de la Organización Egipcia de Derechos Humanos (6.04.94 y 10.05.94), de la *Human Rights Watch (Report 1993)* y de Amnistía Internacional (Informe 1994) coinciden en denunciar dichos abusos.

12. Sobre la evolución sociopolítica del régimen egipcio ver Martín Muñoz, G. (1992) *Política y elecciones en el Egipto contemporáneo (1922-1990)*. Madrid: ediciones del ICMA (AECI).